

San Miguel, once de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

Por sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de Peñaflor, en los autos RIT O-111-2019, se acogió la demanda, interpuesta por Marcela Elisa Galleguillos Arrieta, en contra de Corporación Educacional Integral Altazor, declarando que ésta incurrió en responsabilidad civil contractual respecto a la enfermedad profesional declarada en relación a la actora, condenándola a pagar la suma de quince millones de pesos por concepto de daño moral; rechazando en lo demás la demanda, sin costas.

Contra dicha sentencia, la parte demandada Corporación Educacional Altazor interpuso recurso de nulidad, fundado en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

Primero: Que la demandada Corporación Educacional Altazor, deduce como causal de nulidad de su recurso la contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, por haberse dictado la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, indicando que la sentencia presenta una errada valoración de la prueba incorporada en autos, esencialmente respecto de la prueba documental.

Indica que el considerando décimo de la sentencia recurrida expone:

“...Que, a fin de fijar el monto de la indemnización por daño moral, esta magistratura tiene presente para su evaluación que la causa directa de la enfermedad profesional fue producto de la acción directa de su empleador, a través del maltrato del cual fue objeto, lo que implicó un padecimiento mental que se extendió durante un año y medio mientras desempeñaba sus funciones, y que ha implicado un tratamiento que aún continúa hasta el día de hoy. Se destaca

FXVKDXTGE



además que no existió medida alguna por parte de la demandada que evitara la producción de la situación descrita, como, asimismo, elementos que generaran la debida conciencia de seguridad que evitara una mala relación entre los trabajadores y, en especial, de la dirección para con la actora. Teniendo en vista lo anterior, y sin perjuicio de estimar esta magistratura que la cuantía solicitada es alta teniendo presente los montos que se regulan por estas materias, se ordenará pagar a la demandada la suma de \$15.000.000 de pesos por concepto de daño moral...” (sic).

Indica que la prueba valorada son los siguientes documentos: 1. Documentos aportados por ACHS (Asociación Chilena de Seguridad), “entre ellos estudio de puesto de trabajo, presentación escrita y fundada, informes, registros clínicos y DIEP”. Se enfatiza en el informe de evaluación de puesto de trabajo, la declaración de la informante doña Judith Rojas Ponce. 2. Resolución Exenta R-01-ISESAT-07175-2019 de 22 de abril de 2019 de la Superintendencia de Seguridad Social. 3. Informe psicológico emitido por doña Judith Rojas Ponce.

Hace presente que, respecto de la profusa prueba documental que obra en autos no comprendida en las anteriores, informes de entidades oficiadas, así como la testimonial y absolución de posiciones, el tribunal a quo expresamente señala, que en nada modifica lo resuelto.

Sostiene que se realizó una errada valoración de la prueba, dando con ello por establecidos hechos que no se encuentran suficientemente acreditados en autos. En efecto, respecto de la existencia de una enfermedad de origen profesional, si bien no formula reproche, hace presente dos elementos que se expresan en la sentencia y que generan una convicción errada al momento de valorar la prueba para efectos de determinar el monto indemnizatorio.

Señala que se reprocha expresamente que el demandado no formuló reclamo alguno tendiente a desvirtuar lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social. Al respecto recuerda que el demandado se encuentra impedido legalmente de formular reclamo alguno, toda vez que la resolución se dicta con



ocasión de un reclamo formulado por la actora ante la resolución de la Asociación Chilena de Seguridad que determinó que la enfermedad no tenía origen profesional, aplicándose lo dispuesto en el artículo 77 bis inciso 2º de la ley 16.744 que expresamente dispone que ante este tipo de reclamo la Superintendencia conoce del mismo con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. En consecuencia, el reproche formulado carece de sustento legal y por lo tanto no debió ser objeto de ninguna apreciación en la sentencia.

Añade que la resolución Exenta R-01-ISESAT-07175-2019 de la Superintendencia de Seguridad Social es de fecha 22 de abril de 2019, por lo que la calificación de enfermedad profesional de la actora se produce con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo de fecha 28 de febrero de 2019, es decir, cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente, lo cual es relevante, porque antes de dicha calificación no hay evidencia alguna de situaciones asociadas a liderazgo disfuncional diagnosticado en la calificación, en la organización demandada, tanto respecto de todos sus trabajadores, como de la propia demandante, así como la ocurrencia de enfermedades profesionales; de ello da cuenta el informe de la Inspección del trabajo que informa la inexistencia de denuncias sobre vulneración de derechos, sumado a que no se acreditó ninguna incapacidad médica por parte de la demandante de otro trabajador mediante licencias médicas y/o tratamientos terapéuticos, con anterioridad a su concurrencia a la mutualidad el 21 de diciembre de 2018. Del mismo modo no hay antecedentes de que la actora antes de su concurrencia a la mutualidad pusiese en conocimiento del demandado situaciones médicas de afectación psicológica u enfermedad alguna. Por último, quedó establecido con los contratos de trabajo que la trabajadora prestó servicios a la demandada por un periodo superior a quince años de manera continua y sucesiva, sin evidenciar alguna incapacidad médica atribuible a su empleador. En consecuencia, al tenor de toda la prueba rendida, queda de manifiesto que el demandado durante la vigencia de la relación laboral con la actora no tenía evidencia o indicio alguno de que circunstancias



asociadas a liderazgo disfuncional afectaran médica o terapéuticamente a uno o más de los trabajadores, por lo que no se encontraba en condiciones de adoptar medidas concretas para evitar la ocurrencia de la enfermedad profesional de la demandante. Reafirma lo anterior que, ante el estudio de puesto de trabajo, citado expresamente en la sentencia recurrida, realizado por la Asociación Chilena de Seguridad, con ocasión de la denuncia por enfermedad profesional de la actora el 21 de diciembre de 2021, esta entidad no formuló, ni recomendó a la empresa denunciada, ninguna medida preventiva y paliativa en relación con los hechos denunciados y el diagnostico medico evacuado.

Sostiene que se indicó con determinación, que el periodo de padecimiento de la actora durante la vigencia de la relación laboral como consecuencia del maltrato al que se vio expuesta por parte del empleador y del director del establecimiento, alcanza un rango temporal de un año y seis meses contabilizados desde la fecha de asistencia de la actora a la Asociación Chilena de Seguridad, esto es el 21 de diciembre del año 2018, hacia atrás. Este criterio fáctico, de carácter temporal resulta determinante en la fijación del monto indemnizatorio que da cuenta la sentencia recurrida, en circunstancias que conforme al tenor de toda la prueba rendida en autos, no hay antecedentes que puedan dar por establecido aquello, indicando que en la ficha clínica de atención de la actora, emitida por la Asociación Chilena de Seguridad el 4 de enero de 2019, en su anamnesis se señala que la paciente no tiene antecedentes médicos relevantes ni de salud mental. Concluye que, a la fecha de presentarse a tratamiento en la Asociación Chilena de Seguridad, esto es el 21 de diciembre del 2018, la actora no presentaba antecedentes médicos de carácter orgánicos y de salud mental. Agrega que el certificado médico emitido por la psicóloga Carmen Gloria Parra, fechado el 19 de enero de 2019, certifica que la demandante tenía un tratamiento psicológico cada 15 días desde noviembre a la fecha, es decir, dicho documento da cuenta que la demandante estaba sujeta a un tratamiento psicológico solo desde el mes anterior a la fecha que concurre a la Asociación



Chilena de Seguridad, siendo el único antecedente emitido por un profesional especialista que da cuenta en autos de un tratamiento psicológico a la demandante antes de su asistencia a la Asociación Chilena de Seguridad. Agrega que, en informe oficiado por la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, se da cuenta que durante el período comprendido entre el año 2016 y el 28 de febrero de 2019, no hay antecedentes algunos sobre denuncias formuladas por la demandante sobre acoso laboral, hostigamiento laboral, discriminación o malos tratos en contra del demandado, así como fiscalizaciones relativas a dichas materias. Sostiene, además, que el informe oficiado por la Ilustre Municipalidad de Peñaflor da cuenta de que la demandante el 1 de marzo de 2019 ingresó a prestar servicios a dicha repartición, contrato que fue renovado en calidad de indefinido una vez terminado el vínculo laboral con la demandada de autos, esto es, el 28 de febrero de 2019, ingresó a prestar servicios el día siguiente en la Municipalidad oficiada, lo que da cuenta de que no existía a esa fecha ninguna incapacidad laboral de parte de la trabajadora, para desempeñar funciones bajo contrato de trabajo.

Añade que, los set de correos acompañados en autos por la parte demandante desde el año 2016 al 2018, dan cuenta de que los requerimientos solicitados a la demandante tiene que ver con ámbitos de su competencia laboral y profesional tanto como directora, así como encargada de convivencia escolar; en todos ellos no se observa de manera objetiva, malos tratos en sus formulaciones, un lenguaje que puede considerarse ofensivo, términos vejatorios, degradantes o solicitudes inapropiadas o situaciones de hostigamiento o agobio laboral.

Explica que, en la ficha clínica de atención de la actora, emitida por la Asociación Chilena de Seguridad el 8 de enero de 2019, en su anamnesis la demandante expresa estar vulnerable, ansiosa, con ansiedad por reintegro en sus funciones, en circunstancias que está acreditado que la demandante tenía plena certeza al que no volvería a cumplir funciones para la demandante.



Continúa analizando las declaraciones de los informantes en evaluación de puesto de trabajo realizada por la Asociación Chilena de Seguridad en el mes de enero 2019, así como los testimonios de testigos y el informe psicológico de Judith Rojas Ponce, que señalan como malos tratos que habría sufrido la demandante hechos aislados, donde no se definen fechas, ocasiones, lugares y circunstancias precisas en términos temporales por lo que a partir de los mismos no es posible fijar una línea temporal en que estos se hayan sucedido. En relación con estos antecedentes, en el fallo no se hace análisis y razonamiento alguno para efectos de determinar el valor probatorio del mismo, que la única testigo elegida al azar en la evaluación de puesto de trabajo, señalara expresamente que la relación entre don Luis Zapata como empleador y el director del establecimiento era cordial con la demandante, lo cual ciertamente se contrapone a las argumentaciones vertidas por testigos interesados, especialmente Judith Rojas Ponce, en orden a los supuestos malos tratos inferidos a la demandante por parte de tales personas y malas relaciones laborales entre ellos; no se establece en el fallo las razones lógicas por las cuales se le otorgan valor probatorio a estas últimas en desmedro de las otras. Hace presente que en el fallo se cita expresamente la declaración en calidad de informante de Judith Rojas Ponce, como testigo aportado por la trabajadora denunciante en la evaluación de puesto de trabajo, y además su informe psicológico emitido en el mes de julio del año 2019.

Precisa que está acreditado en autos; a) que la señora Judith Rojas Ponce tiene vínculos de amistad con la demandante; b) que en la evaluación de puesto de trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad, de enero del año 2019, la actora la designa como informante, y en su declaración, la cual es citada textual en el fallo recurrido, se refiere a don Luis Zapata, identificado como la figura del empleador por la demandante, como un “misógino”, y define la organización como nepotista donde se privilegia el “pituto” y se llevan a cabo malas prácticas; c) que en el fallo se cita de manera textual la parte conclusiva del informe psicológico emitido por la misma informante antes individualizada, en el mes de julio de 2019,



donde expresa que la actora *“ha presentado en primera instancia crisis de pánico, trastorno adaptativo, daño a la dignidad humana y todas las consecuencias nefastas que la situación de menoscabo, maltrato y agobio laboral provocó a nivel laboral, económico y psicológico, siendo víctima directa, quedando exhibida a la victimización primaria aludiendo a la experiencia individual implicando consecuencia perjudiciales que se originan directamente de todas las situaciones experimentadas en el lugar de trabajo”*. El fallo no contiene ningún razonamiento que permita establecer porque se le da valor probatorio a la declaración de Judith Rojas Ponce, sosteniendo que ella carece de la adecuada objetividad e imparcialidad, en su relación con las partes en el juicio, para evaluar y emitir un informe psicológico concluyente de la situación de la demandante en su relación con el empleador demandado

Sostiene que no hay antecedente psicológico emitido durante el mes de mayo del año 2017 y del mes de noviembre del año 2018 que dé cuenta de un padecimiento psicológico por parte de la demandante en dicho periodo, circunstancia que, habiendo invocado daño moral, correspondía acreditarlo. Los únicos informes y resoluciones que dan cuenta de una enfermedad profesional fueron emitidos con posteridad al término de la relación laboral entre la actora y la demandada de autos, es decir, después del 28 de febrero del año 2019, cuando la demandante prestaba funciones bajo contrato de trabajo sin ningún tipo de incapacidad para otro empleador.

Indica que está acreditado en autos que la demandante fue avisada del término de la relación laboral con el demandado el día 21 de diciembre del año 2018, dicha terminación se produciría el día 28 de febrero del año 2019. El mismo día 21 de diciembre se traslada a la Asociación Chilena de Seguridad para denunciar la enfermedad profesional; el domingo 23 de diciembre de 2018 solicita vía correo electrónico, que obra en autos, el adelanto de sus vacaciones debido al aviso de término de contrato; el día 24 de diciembre del año 2018 mediante correo electrónico se autoriza dicho adelanto de vacaciones, concluyendo que la



demandante durante quince años de relación laboral continua no había formulado denuncia alguna por enfermedad profesional y no había formulado denuncia alguna por maltratos, hostigamiento o acoso laboral. Solo lo hace una vez que es avisada sobre el término de su relación laboral.

En otro orden de ideas, sostiene que no hay evidencia que antes de la concurrencia de la actora a la mutualidad el 21 de diciembre de 2018, que dé cuenta de que haya puesto en conocimiento al demandado las afecciones.

Concluye que, mediante un razonamiento lógico de los antecedentes probatorios es posible advertir que, ante la concurrencia del daño moral alegado por la demandante, con ocasión de un obrar negligente de su empleador, ésta se expuso imprudentemente al mismo, al no tomar ninguna medida al objeto de evitar su ocurrencia, lo cual ciertamente, en materia de daño moral, tiene una importancia decisiva al fijar el resarcimiento de contenido económico del daño verificado. La sentencia recurrida carece de este razonamiento.

Segundo: Que, para que prospere la causal alegada por el recurrente, es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista.

Además, la causal exige que en el recurso se indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

Tercero: Como se puede colegir del arbitrio, respecto del primer supuesto, esa condición no concurre en la especie, pues el impugnante se limita a discrepar del fallo y a formular su propia apreciación de la prueba rendida, criticando el raciocinio valorativo que hace el juez de base en el considerando décimo, en el cual concluye que la suma de dinero que ordenará pagar como indemnización de perjuicios por daño moral asciende a quince millones de pesos.

Que cabe reproducir el considerando decimo del fallo aludido que señala en lo pertinente: “Que, a fin de fijar el monto de la indemnización por daño moral, esta magistratura tiene presente para su evaluación que la causa directa de la

FXVKDXTGE

enfermedad profesional fue producto de la acción directa de su empleador, a través del maltrato del cual fue objeto, lo que implicó un padecimiento mental que se extendió durante un año y medio mientras desempeñaba sus funciones, y que ha implicado un tratamiento que aun continúa hasta el día de hoy. Se destaca además que no existió medida alguna por parte de la demandada que evitara la producción de la situación descrita, como asimismo, elementos que generaran la debida conciencia de seguridad que evitara una mala relación entre los trabajadores y, en especial, de la dirección para con la actora...”.

Como puede advertirse, el sentenciador hizo uso de su facultad privativa de valorar la prueba, atribución que la ley no le concede al litigante, razón por lo cual el primer supuesto antes referido no se cumple en la especie, teniendo en consideración que el recurrente no ha negado la existencia de un daño moral solamente ha cuestionado la entidad del mismo y el periodo establecido, criticando principalmente el hecho que le estaba impedido impugnar el Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, y la falta de antecedentes previos sobre la problemática de maltrato laboral planteada por la actora, elementos que por lo demás no incidieron en la determinación de su cuantía.

Que por otro lado el fallo en el párrafo final de su motivación sexta aborda el razonamiento empleado para establecer el período del mismo, de la siguiente manera: "En ese orden de ideas, y entendiendo que las situaciones que dieron origen a la enfermedad profesional se dieron mientras la demandante se desempeñaba en su cargo, esto es durante 1 año y 6 meses hacia atrás desde que concurre a dependencias de la Asociación Chilena de Seguridad, se refuerza la tesis de que la enfermedad profesional que la afectó se produjo mientras ejercía sus funciones y no con posterioridad al término de las mismas,....”.

Más aun conforme a la crítica planteada al fallo luego de cuestionar el análisis de la prueba rendida, esta puede referirse más a un reproche de ponderación de la misma o razonamiento que llevó a la conclusión arribada,



argumento que eventualmente puede referirse a una causal distinta de la invocada.

En cuanto al segundo requisito, el recurso tampoco lo satisface, pues solo alude en forma genérica a que la sentencia contradice principios rectores en materia de sana crítica en concreto a las reglas de la lógica, sin esbozar siquiera la infracción específica eventualmente lesionada, respecto del contenido de los medios de prueba, por el contrario el fundamento que entrega para justificar la concurrencia de la vulneración a tales principios no es sino su propia apreciación de como la prueba rendida debió haberse valorado, reproduciendo parcialmente pasajes de la sentencia, lo que no puede configurar la causal invocada.

Cuarto: Que, en consecuencia, la causal invocada carece de todo fundamento, por lo que el recurso debe ser desestimado.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la demandada Corporación Educacional Altazor, contra la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de Peñaflor, en los autos RIT O-111-2019, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro (s) Leonardo Varas Herrera.

Laboral-Cobranza N° 327 -2021.

Pronunciada por la Primera Sala de la Itma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por las Ministras señor Roberto Contreras Olivares, señora María Alejandra Pizarro Soto y señor Leonardo Varas Herrera. No firma la Ministro señora Pizarro, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse con feriado legal.





FXVKDXTGE

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministro Roberto Ignacio Contreras O. y Ministro Suplente Leonardo Varas H. San miguel, once de agosto de dos mil veintiuno.

En San miguel, a once de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>